

(R. C. de la C. 315)

RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para ordenar a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas de Puerto Rico y a la Autoridad de Energía Eléctrica notificar a LUMA Energy que darán por terminado el contrato conocido como el Operation and Maintenance Agreement del 17 de junio de 2020 y el Supplemental Agreement del 22 de junio de 2020, en un término de sesenta (60) días, por incumplimiento de varias cláusulas contractuales por parte de LUMA Energy, LLC (en un momento conocida como LUMA ManageCo) y LUMA ServCo., entre ambos los Operadores de GridCo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El sistema de transmisión y distribución eléctrico de Puerto Rico, el cual se encontraba en estrechez económica, quedó totalmente destruido por el impacto del huracán María en septiembre de 2017. Desde entonces, comenzó una secuencia de desastros en la recuperación de este sistema. Entre esos desastros recordamos la contratación de las compañías Whitefish y Cobra. Esta última fue encausada, junto a la oficial de FEMA a cargo del desastre en Puerto Rico, por el Gobierno Federal por mal uso de los fondos federales. Ante la extensión de tiempo que tomó la recuperación del sistema, se tomaron determinaciones que, hoy a todas luces fueron también desacertadas, ya que llevaron a la creación de un monopolio privado bajo un contrato leonino y contrario a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.

La entonces Gobernadora, Wanda Vázquez Garced, firmó, el 17 de junio de 2020, la “concesión” del sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica, en adelante AEE, a la empresa LUMA Energy, LLC y LUMA Energy Servco., LLC, en adelante LUMA Energy, con el lanzamiento de una campaña publicitaria del referido acuerdo titulada: “Lo mejor para Puerto Rico”.

LUMA Energy, que, según la Autoridad para las Alianzas Público Privadas de Puerto Rico, en adelante AAPP, y el Negociado de Energía de Puerto Rico, en adelante NEPR, es un tipo de consorcio que debió estar compuesto, por las compañías Quanta Services, ATCO y IEM (pero que finalmente se constituyó como corporación sin la participación de IEM), fue escogida para operar, administrar, mantener, reparar y restaurar la red eléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica por un periodo de 15 años. Esto, con la expectativa de que la privatización del sistema propenda a una estabilización de una tarifa más baja para el servicio y a un sistema confiable y resiliente.

Los funcionarios de la AAPP, bajo la pasada Administración (2017-2020), consideraron que la referida empresa era la más capacitada para realizar la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico. Además, alegaron que fue la propuesta más económica y la que ofreció los mejores términos al Gobierno. Del análisis realizado por el Comité de Adjudicación, no surge con claridad cómo se alcanzaron estas conclusiones, descartando a un licitador con mayor experiencia (PSEG) y con una propuesta que parecía ser más económica para el pueblo de Puerto Rico (\$273 millones menos que la propuesta de LUMA Energy).

LUMA Energy tomó control del sistema el 1 de junio de 2021. Desde entonces, esta corporación ha confrontado varios problemas y deficiencias en su servicio que abarcan desde conflicto de intereses, hasta apagones totales que han causado pérdidas millonarias en la economía del país.

LUMA Energy ha incurrido en irregularidades en sus contrataciones, ya que su contrato permite que esta contrate con sus compañías dueñas, Quanta Services y ATCO/Canadian Utilities, y sus subsidiarias y afiliadas. Por esto, se incorporó en Puerto Rico la corporación ATCO PR Infrastructure Solutions, LLC, que es administrada por los dos más altos funcionarios de LUMA, Wayne Stensby, CEO de LUMA, y Paul Goguen, Vicepresidente de LUMA. Es de presumirse que ambos funcionarios devengan algún tipo de salario por ejercer como administradores de esta empresa con la que LUMA ha contratado. Esto presenta un conflicto de intereses ya que ambos funcionarios administran fondos públicos de la Autoridad de Energía Eléctrica, los que utilizan para contratar con ATCO PR Infrastructure Solutions, LLC y de la cual seguramente devengan un ingreso que surge, precisamente, de los fondos públicos que ellos mismos administran. Debido a esto el contrato viola las disposiciones de la Constitución del Estado Libre Asociado, de las leyes de contratación gubernamental y toda la jurisprudencia relacionada con estos temas. Simplemente, es un puente a posibles actos de corrupción, o como mínimo, contrarios al mejor interés del pueblo de Puerto Rico.

Además de contratar con compañías afiliadas que el propio Wayne Stensby administra y de las que obtiene beneficios económicos, LUMA Energy exige contratación de mano de obra de la International Brotherhood of Electrical Workers (IBEW), que es más costosa que la de Puerto Rico, encareciendo el costo de esta mano de obra y por consiguiente aumentando los costos de la energía eléctrica. ATCO PR Infrastructure Solutions, LLC no es la única corporación afiliada a Quanta o a ATCO con la que LUMA Energy contrata.

Además de las irregularidades en sus contrataciones, LUMA Energy ha promovido conflictos de interés de su CEO, Wayne Stensby. El contrato de LUMA Energy establece que los dueños de esta son Quanta Services y ATCO/Canadian Utilities en una proporción de 50/50. Es de esperarse entonces, que las ganancias que

genere LUMA se dividan en la misma proporción. Por otra parte, Stensby es un accionista de ATCO, por lo que en la medida que LUMA y ATCO PR Infrastructure Solutions, LLC generen más ganancias, Stensby recogerá mayores dividendos de las acciones que posee. Esto es un incentivo para Stensby, quien es el CEO de LUMA, para contratar con su dueña ATCO y sus subsidiarias y afiliadas. También, puede ser un incentivo para que LUMA anteponga las ganancias de ATCO y sus subsidiarias y afiliadas al mejor interés del pueblo de Puerto Rico.

Para cumplir con el contrato con LUMA Energy, se desviaron fondos públicos necesarios en otras agencias y la propia AEE, hacia las cuentas operacionales de la primera. El contrato de LUMA requiere que la AEE mantenga unas cuentas operacionales de las que LUMA Energy puede retirar dinero cuando lo necesite. Siempre que LUMA retire dinero de alguna de esas cuentas la AEE, o en su defecto el Gobierno debe reponer el dinero retirado y mantener el balance estipulado por contrato en dichas cuentas. Para poder ejecutar el traspaso de control del sistema de transmisión y distribución a LUMA, la Junta de Supervisión Fiscal sacó del Fondo General del Gobierno \$750 millones de fondos públicos, afectando el presupuesto de varias agencias, y \$250 millones de la AEE. Sin embargo, hace 7 años no se pagan las aportaciones al Sistema de Retiro de los empleados de la AEE, poniendo en precario la solvencia de este y las pensiones de sobre 12,000 retirados.

LUMA Energy ha incurrido en una administración deficiente de fondos públicos. Durante el año de transición (Front End Transition), incurrió en gastos que fueron sufragados con fondos públicos de la Autoridad de Energía. Estos gastos resultaron ser, en ocasiones, exorbitantes y no fueron dirigidos a procurar fines públicos, ni para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Gobierno, según requiere la Sección 6 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Varios ejemplos de esto se descubrieron mediante requerimientos de información dirigidos a LUMA Energy. Es importante recordar que LUMA Energy ignoró la autoridad de investigación de la Legislatura y reiteradamente rehusó contestar los requerimientos de información. Finalmente, después de haber acudido, sin resultados a su favor, a la Corte Federal que atiende el caso de la quiebra de la AEE y de escalar la controversia hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico, LUMA Energy tuvo que divulgar la información que se le requirió por esta Comisión. Como parte de esa información, se evidenciaron gastos para obtener visas de trabajo, mudanzas, alquileres de apartamentos a precios de sobre \$4,500 mensuales, casas en zonas de lujo de Guaynabo y San Juan, hospedajes en hoteles de lujo, cenas en restaurantes de lujo, incluyendo el consumo de bebidas alcohólicas, entre otros gastos.

LUMA Energy ha incurrido en gastos en exceso de lo estimado y presupuestado. Durante los primeros dos trimestres del Año Fiscal 2021-2022, estando LUMA Energy en control del sistema eléctrico de Puerto Rico (excepto la generación de electricidad),

LUMA Energy se sobregiró del presupuesto aprobado por el Negociado de Energía de Puerto Rico por cuantías millonarias en ambas ocasiones. El primer trimestre se sobregiró por la cantidad de \$32 millones, según su informe trimestral Q1. Ante esto, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, quien es la administradora del contrato de LUMA, ha sido negligente en su deber como administrador. La Junta de Supervisión Fiscal le aprobó \$45 millones adicionales en el presupuesto, sin que se conozcan públicamente los motivos para el sobregiro. Lo mismo sucedió el segundo trimestre, cuando LUMA Energy se sobregiró por \$28 millones. En un año y medio de su gestión, LUMA Energy ha gastado más de \$75 millones sobre lo esperado. Esto, además de recibir el pago de la cuota fija según dispuesta en el contrato suplementario.

De hecho, LUMA Energy, en el año de transición se excedió en sobre \$34 millones de su propuesta inicial según su informe mensual del año de transición rendido en julio de 2021.

No solo se ha excedido en los gastos esperados, sino que LUMA Energy ha incumplido con las disposiciones del contrato. Por ejemplo, según los datos provistos por LUMA Energy al Tribunal en el Caso Civil Núm. SJ 2021-CV 03939, esta solo cuenta con cerca de 500 celadores y supervisores de líneas, de los que 200 tienen menos de 1 año de experiencia y sobre 160 fueron importados de Canadá y Estados Unidos. Estos celadores y trabajadores de campo que se contrataron fuera de Puerto Rico, nos cuestan hasta el triple de lo que cuestan los celadores y trabajadores de campo de Puerto Rico.

Como si todo esto no fuera suficiente, LUMA Energy no ha generado los ahorros esperados que justificaban el pago de las cuotas anuales a esa corporación. La AAPP escogió a LUMA a base de la teoría que las eficiencias que traería con su *expertise* serían suficientes para pagar el contrato y generar ahorros millonarios que estabilizarían el costo de la energía. Hasta ahora hemos sufrido 5 aumentos en el costo de la energía en poco más de 12 meses y ya LUMA solicitó un sexto aumento. LUMA sigue sobregirándose en lugar de generar ahorros y la AAPP sigue siendo negligente en su deber de administrar el contrato. Se proyectaba un ahorro de \$32 millones para el 2022. Durante los primeros dos trimestres LUMA Energy se sobregiró por \$60 millones. Ante este sobregiro, no se han materializado los ahorros según proyectados. Al no materializarse los ahorros proyectados, lo que resulta en un costo más alto para el servicio de energía eléctrica, se derrota la justificación del contrato.

Finalmente, pero no menos importante, está el asunto del desempeño deficiente de LUMA Energy, que al momento en que tomó el control del sistema eléctrico de Puerto Rico, el 1 de junio de 2022, empeoró el desempeño del sistema según surge de la información presentada por la propia LUMA Energy al Tribunal en el Caso Civil Núm. SJ 2021-CV 03939. Mediante la información presentada, LUMA Energy corrobora que el SAIDI, que es la duración promedio de la interrupción de servicio por cada cliente atendido, fue de 89.88 minutos para el mes de julio de 2020 (cuando el sistema de

distribución estaba bajo el control de la AEE) y subió a 139.24 minutos para julio de 2021 (cuando el sistema de distribución estaba bajo el control de LUMA Energy). De igual forma, la frecuencia de apagones aumentó cuando LUMA Energy tomó control del sistema.

Además, LUMA Energy ha sido responsable de múltiples apagones masivos, incluyendo un apagón total en todo el país, tan reciente como el 6 de abril de 2022. De hecho, el NEPR ha promovido investigaciones sobre varios de estos apagones causados por LUMA Energy.

Según la Resolución del 11 de junio de 2021, en el caso número NEPR-IN-2021-0002, sobre el Comienzo de Investigación y Requerimiento de Información, el NEPR estableció que el 10 de junio de 2021, a aproximadamente las 6:11 p.m., ocurrió un incendio (“incidente”) en la subestación ubicada en las instalaciones de Monacillos, San Juan, propiedad de la AEE. Dicha instalación es operada, desde el 1 de junio de 2021, por Luma Energy Servco, LLC’ (“LUMA”) bajo el Contrato de Operación y Mantenimiento del Sistema de Transmisión y Distribución de la Autoridad (“DMA”, por sus siglas en inglés) y su suplemento titulado Acuerdo de Términos Suplementario del Sistema de Transmisión y Distribución (“Suplemento”).

El incidente provocó la salida de operación de ciertas unidades de generación, incluyendo algunas operadas por la Autoridad, lo cual ocasionó que más de 700,000 clientes sufrieran una interrupción del servicio eléctrico. Según el informe preliminar de LUMA Energy, el servicio fue restablecido en su totalidad al siguiente día, 11 de junio de 2021, a eso de las 8:00 pm. Inicialmente, LUMA Energy levantó la sospecha de que el incidente fue causado por sabotaje. Meses después, LUMA Energy presentó un informe, bajo sello de confidencialidad, por lo que aún no se conoce públicamente cuál fue la causa del incidente. Cabe mencionar que tal grado de confidencialidad es contraria a la política pública establecida mediante la Ley 17-2019, que dispone para promover la transparencia y la participación ciudadana en todos los procesos relacionados al servicio de energía en Puerto Rico.

Apenas dos meses más tarde, el NEPR inició otra investigación sobre el evento de interrupción de la línea de transmisión 38900, ocurrido el 22 de agosto de 2021 (CASO NÚM.: NEPR-IN-2021-0003). Esta falla ocasionó el disparo (trip) de la línea 38900 y salidas posteriores de ciertas unidades de generación (“Incidente 38900”), por lo que el NEPR ordenó a LUMA Energy presentar la información relacionada con dicha falla en o antes de las 12:00 pm de 17 de noviembre de 2021. Nuevamente bajo sello de confidencialidad, el 17 de noviembre de 2021, entregó su informe. En este caso tampoco ha fluido la información públicamente, contrario al requisito de transparencia esbozado en la política pública energética.

En otra investigación del NEPR, sobre un incidente ocurrido el 21 de febrero de 2022, aproximadamente a las 1:15 p.m., en el sistema eléctrico del país que dejó a aproximadamente 700,000 abonados sin servicio de electricidad (“Incidente”). El Incidente provocó la salida de operación de ciertas unidades de generación, incluyendo Central San Juan, Palo Seco y la unidad 2 de Aguirre, operadas por la AEE. LUMA, el operador del sistema de transmisión y distribución informó que esperaba restaurar el sistema eléctrico en un periodo de 4 a 5 horas, según informes de la prensa. Inicialmente, LUMA achacó la situación a un problema de generación, pero en un parte de prensa, LUMA explicó que la avería se debió a “una falla en el tramo de línea L38100 de 115 Kv entre la subestación del Centro de Transmisión del Viaducto y la planta de generación de San Juan”.

En el expediente electrónico del NEPR, no aparecen los informes requeridos. No obstante, la AEE publicó un informe que, mediante las redes sociales, en el que informó que el 21 de febrero de 2021, aproximadamente a la 1:19 pm se registró un disturbio en el área de transmisión y distribución, en la línea 38100 a cargo de LUMA Energy, en el norte del país que causó la pérdida de unos 1,000 MW, incluyendo el disparo de las unidades generatrices Palo Seco 3, San Juan 6 y 9 y Aguirre 2, afectándose casi 700,000 abonados.

La más reciente investigación iniciada por el NEPR es sobre la interrupción de servicio eléctrico de 6 de abril de 2022, CASO NÚM.: NEPR-IN-2022-0002. Este apagón fue uno de toda la Isla y según el informe preliminar presentado por LUMA Energy aún se requiere de más investigación para poder identificar la causa de este apagón. De hecho, el NEPR informó que estará contratando los servicios de un investigador independiente, quien se encargará de realizar el análisis necesario sobre las causas del Incidente. Esto, separado de la investigación que ha contratado LUMA Energy.

Con relación a la explosión ocurrida en el patio de interruptores de la Central Costa Sur, el 6 de abril de 2022, es importante señalar que el Director Ejecutivo de la AEE, ingeniero Josué A. Colón Ortiz, había cursado una carta al Principal Oficial Ejecutivo de LUMA Energy, señor Wayne Stensby, con fecha del 9 de marzo de 2022, advirtiéndole sobre su deber de cumplir con el contrato conocido como el Shared Services Agreement, por el que reciben el pago de \$58 millones anuales, adicionales a los cargos fijos y a los reembolsos millonarios que reciben mensualmente. En la carta el ingeniero Colón Ortiz advirtió a LUMA Energy que existen unos 2,500 recipientes a presión bajo su responsabilidad, incluidos compresores, tanques de aire, interruptores de circuito de gas y disyuntores de aceite en varias instalaciones del sistema eléctrico, incluyendo los patios de interruptores de las centrales. Lamentablemente y como es de conocimiento general, uno de estos disyuntores de aceite explotó causando un apagón general en todo el país, y una secuela de pérdidas cuantiosas en la economía de Puerto Rico.

Otro aspecto importante, es el hecho de que LUMA Energy ha incumplido con su deber de facilitar la interconexión para los clientes que tienen un sistema de energía renovable en sus residencias. Tampoco se conoce de las proyecciones y gestiones para la interconexión de proyectos de energía renovable “utility scale”. Esto constituye otra violación a la política pública energética, según establecida por la Ley 17 - 2019.

Una de las funciones más apremiantes que LUMA Energy debe desempeñar, según el contrato conocido como el Operation and Maintenance Agreement (OMA) del 17 de junio de 2020, es la de liderar y administrar la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico que será sufragado con más de \$10 billones de fondos federales. Esta función es una que requiere un cumplimiento oportuno con un programa de reconstrucción, ya que el incumplimiento con este puede conllevar la pérdida de los fondos federales.

Recientemente, LUMA Energy, por medio de uno de sus portavoces, el licenciado Kevin Acevedo, reclamó a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) por su alegada lentitud en liberar los fondos para los distintos proyectos de reconstrucción del sistema eléctrico. No obstante, FEMA confirmó que, hasta la semana pasada, LUMA Energy y la AEE solo habían completado ante esta agencia federal la presentación de 20 proyectos, de sobre 500 proyectos necesarios para la reconstrucción del sistema eléctrico. De hecho, las únicas dos iniciativas aprobadas por FEMA han sido de la AEE. Esto es otra muestra de que LUMA Energy ha incumplido con las responsabilidades adquiridas contractualmente mediante el OMA.

Todos estos conflictos y deficiencias en los que ha incurrido LUMA Energy, han surgido a la luz pública gracias a la continua investigación exhaustiva y abarcadora que ha realizado durante dieciocho meses la Cámara de Representantes, muy especialmente a través de su Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía.

Ante las deficiencias insostenibles y las varias instancias de incumplimiento con disposiciones contractuales en las que ha incurrido LUMA Energy, esta Cámara de Representantes tiene el deber de ejercer la autoridad que le brinda el Artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que trata sobre el Poder Legislativo, en su Sección 16, al establecer que la Asamblea Legislativa tendrá facultad para crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Ordenar a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas de Puerto Rico y a la Autoridad de Energía Eléctrica notificar a LUMA Energy que darán por terminado el contrato conocido como el Operation and Maintenance Agreement del 17 de junio de 2020 y el Supplemental Agreement del 22 de junio de 2020, en un término

de sesenta (60) días, por incumplimiento de varias cláusulas contractuales por parte de LUMA Energy, LLC (en un momento conocida como LUMA ManageCo) y LUMA ServCo., entre ambos los Operadores de GridCo.

Sección 2.-Se ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica administrar el contrato conocido como el Operation and Maintenance Agreement del 17 de junio de 2020 y el Supplemental Agreement del 22 de junio de 2020, durante el período de transición de sesenta (60) días y posteriormente tome el control de las operaciones de GridCo. La Autoridad de Energía Eléctrica será patrono sucesor de los empleados de LUMA Energy ServCo., que así considere necesarios para garantizar las operaciones de GridCo. y la confiabilidad de todo el sistema eléctrico de Puerto Rico, mientras se aprueba legislación para viabilizar la creación de una nueva estructura administrativa para dirigir las operaciones de este sistema.

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente luego de su aprobación.